

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México



Ponencia del Comisionado Presidente Arístides Rodrigo Guerrero García

Recurso de Revisión

En contra de la respuesta emitida a una solicitud de Acceso a la Información Pública

Expediente

INFOCDMX/RR.IP.1697/2022

Sujeto Obligado

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Fecha de Resolución

Pagnuagta a una Danungia progentado





Palabras clave

Solicitud

Copia de la respuesta que la Fiscalía en Xochimilco dio a una denuncia ingresada el 4 de marzo del 2022 a las 14:24 horas, en la oficialía de partes de Xoch 2.

Respuesta



El Sujeto Obligado a través del área competente para ello, indico a la parte recurrente que se encuentra contenida en una carpeta de investigación, y esta solo puede ser requerida a través de una solicitud directa en materia penal ante el Ministerio público, ya que, es parte de alguna Carpeta de Investigación, se informa a la particular que el mismo se realiza ante el personal del Ministerio Público, que conoce o conoció de la indagatoria aludida, iniciada con motivo de una denuncia o una querella.

Inconformidad de la Respuesta



No se le entrega la información requerida.

El Sujeto detenta la información y no hace entrega de la misma.

Estudio del Caso



I. El Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento debidamente fundado y motivado en el cual expuso su imposibilidad para hacer entrega de la información solicitada, ya que esta, corresponde a un trámite administrativo en materia penal y para obtener ésta debe sujetarse a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en dicha materia, ello es acudir ante el Ministerio Público encargado de dar seguimiento a la misma y acreditar su personalidad, situación por la cual proporcionó los datos de localización para dar seguimiento a la carpeta de investigación.

II. Por lo anterior, se concluye que su actuar se apegó a la normatividad de la materia, así como a los principios de legalidad, certeza jurídica, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 11 de la Ley de la materia, resultando en consecuencia infundado el agravio de la parte recurrente.

Determinación tomada por el Pleno



Efectos de la Resolución

Sin instrucción para el Sujeto Obligado.

Si no estoy conforme con esta resolución ; a dónde puedo acudir?¶







Respuesta a una Denuncia presentada.

-puedo-



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1697/2022

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA

PROYECTISTA ALEX RAMOS LEAL Y MARIBEL LIMA ROMERO.

Ciudad de México, a primero de junio de dos mil veintidós.

RESOLUCIÓN por la cual, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno de este Instituto determinaron **CONFIRMAR** la respuesta emitida por la **Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con el número de folio **092453822000872**.

ÍNDICE	
GLOSARIO	2
ANTECEDENTES	2
I.SOLICITUD	2
II. ADMISIÓN E INSTRUCCIÓN	4
CONSIDERANDOS	8
PRIMERO. COMPETENCIA	8
SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO	9
TERCERO. AGRAVIOS Y PRUEBAS	10
CUARTO. ESTUDIO DE FONDO	11

GLOSARIO

Código:	Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local:	Constitución Política de la Ciudad de México
Instituto:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Ley de Transparencia:	Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Plataforma:	Plataforma Nacional de Transparencia
PJF:	Poder Judicial de la Federación.
Reglamento Interior	Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Solicitud:	Solicitud de acceso a la información pública
Sujeto Obligado:	Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Solicitud.

1.1 Inicio. El treinta de marzo de dos mil veintidós¹, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la parte Recurrente presentó la *solicitud* a la cual se le asignó el número de folio **092453822000872**, mediante el cual se requirió, en la **modalidad de medio electrónico**, la siguiente información:

... Solicito copia de la respuesta que la Fiscalía en Xochimilco dio a la denuncia ingresada el pasado 4 de marzo del 2022 a las 14:24 horas en la oficialía de partes de Xoch 2. ..."(Sic).

¹Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en contrario.

1.2 Respuesta. El cinco de abril, el *Sujeto Obligado* hizo del conocimiento de la persona Recurrente los siguientes oficios, para dar atención a la *solicitud* en los siguientes términos:

Oficio 916/FDX/528/2022-03

"

Derivado de la solicitud realizada por el peticionario, es importante señalar que el Derecho de petición se encuentra previsto en el Artículo 8 Constitucional mediante el cual cualquier persona de manera pacífica respetuosa y por escrito puede dirigir su solicitud ante cualquier autoridad, a la que deberá recaer un acto debidamente fundado y motivado en el que dé respuesta a ese derecho de petición.

Ahora bien sobre el derecho a la información que ejerció ante este Sujeto Obligado a través del Derecho de Acceso a Información Pública, si bien parte de la misma naturaleza del Derecho de petición, éste se diferencia y distingue en que el derecho de Acceso a Información Pública, implica que toda persona sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, (salvo en el caso de derechos de la Protección de Datos Personales), tiene derecho a requerir información registrada en los Archivos del Estado, derecho íntimamente relacionado con el principio de transparencia y rendición de cuentas; es decir, transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos. Y por lo que hace a lo requerido por el peticionario, consistente en información referente a una averiquación previa o carpeta de investigación, esta podrá ser requerida a través de una solicitud directa en materia penal a cargo del Ministerio Público, es decir está relacionado con la instauración de un procedimiento penal en contra de particulares con motivo de una denuncia o querella, cuya sustanciación y procedimiento de solicitud de información (como lo es la citada por el ciudadano) el Ministerio Público, en el ámbito de competencia, proporciona a sujetos específicos (debidamente identificados) dentro del procedimiento de investigación, y la Representación Social justifica debidamente que actuó bajo el principio de legalidad, fundando y motivando cada una de sus determinaciones, por lo que en términos del principio de legalidad, no puede llegar a considerarse la inobservancia de un procedimiento (Leves especiales), pues se traduciría en una intromisión y contravención al mismo.

Así, lo solicitado por el particular debe atenderse a través de un acto administrativo que ejerce una autoridad, (Agente del Ministerio Público) tras un trámite o gestión realizado por un ciudadano, con estricto apego al procedimiento específico normado para ello, y como se ha dicho al tratarse de un procedimiento penal, que es parte de alguna Carpeta de Investigación, se informa a la particular que el mismo se realiza ante el personal del Ministerio Público, que conoce o conoció de la indagatoria aludida, iniciada con motivo de una denuncia o una querella, el cual está sujeto a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en la materia, como es el Código de Procedimientos Penales, acto administrativo (procedimiento específico) que el personal del Ministerio Público desahoga mediante un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de dicha petición, atención que proporciona de conformidad al marco legal de la materia; y en el caso concreto que nos ocupa se debe tener muy en cuenta que la información o diligencias practicadas respecto a una Averiguación Previa, encuadran

perfectamente dentro del ámbito de aplicación de las Leyes Penales, por ser éstas las Leyes especiales en la materia referida. Ello, en cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad competente deberá fundar y motivar la causa legal del procedimiento, esto es, que el Ministerio Publico, deberá observar la legalidad y formalidad del procedimiento, conduciendo su actuar bajo los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos.

Así, en cumplimiento a lo previsto en los numerales 1 y 10 párrafo tercero de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, que establece que cuando se advierta que un ó una solicitante a través de una solicitud de acceso a Información Pública presentada ante la Oficina de Información Pública desahogue una solicitud a cargo del Ente Obligado, se le orientará sobre el procedimiento establecido a realizar para acceder al mismo, por ello se procede a explicar al particular **el procedimiento penal**, atendiendo al marco legal de la materia, en los términos de la normatividad siguiente:

De la lectura al artículo **20, apartado 8 (De los derechos de toda persona imputada)**, fracción VI, se tiene como uno de sus derechos a que sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

Que de la lectura al artículo **20 Apartado C. (Derechos de la víctima o del ofendido**), fracción l. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene entre sus derechos recibir asesoría jurídica; y **cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal**.

En este entendido, dejando a salvo su derecho de petición se le sugiere acuda a la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco a efecto de que se le informe el trámite que le fue dado a sus escritos, promociones presentadas ante la Oficialía de partes. ..."(Sic).

- **1.3 Recurso de revisión.** El seis de abril, la parte Recurrente se inconformó con la respuesta dada a su *solicitud*, por las siguientes circunstancias:
 - No se le entrega la información requerida.
 - El Sujeto detenta la información y no hace entrega de la misma.
- II. Admisión e instrucción.

2.1 Recibo. El seis de abril, por medio de la *Plataforma* se tuvo por presentado el Recurso

de Revisión por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son

contraventores de la normatividad, en materia de transparencia.²

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dieciocho de abril, este Instituto admitió

a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado,

el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1697/2022 y ordenó

el emplazamiento respectivo.3

2.3 Presentación de alegatos. El doce de mayo del año dos mil veintidós, el Sujeto

Obligado vía Plataforma Nacional de Transparencia, remitió a la Ponencia a cargo de

substanciar el expediente en que se actúa, sus alegatos, a través del oficio

916/FDX/844/2022-05 de fecha seis de ese mismo mes, en los siguientes términos:

"…

Por tanto, se reitera que ésta Unidad Administrativa no ha causado violación a derechos fundamentales ni a las garantías previstos en el artículo 6 apartado A, fracciones I y

111 (derecho de acceso al a información pública) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni agravio alguno al recurrente, establecido en ninguna de las fracciones contenidos en el artículo 234 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y no debe perderse de vista que el agravio interpuesto por el recurrente no se encuadra dentro de las hipótesis previstas en las fracciones del contenido del artículo 234 de la Ley de la materia, que nos indica cuando es procedente el Recurso de Revisión, lo anterior en virtud de que la información solicitada le fue proporcionada en tiempo y forma por ésta área administrativa, y cumplimiento con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, los cuales se encuentran establecidos por el contenido del artículo 11 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no puede existir agravio alguno al

recurrente xxxxx, respecto a su solicitud de información pública con número de folio 092453822000872, **toda vez que los motivos de su Inconformidad devienen infundados al**

no asistirle la razón al solicitante de información por los motivos señalados en líneas precedentes.

²Descritos en el numeral que antecede.

³ Dicho acuerdo fue notificado a las partes, el tres de mayo.

OBJECIÓN AL AGRAVIO ÚNICO

No obstante lo manifestado en el apartado de causa de improcedencia, esta Fiscalía procede a objetar el pretendido agravio del recurrente en atención a las siguientes consideraciones:

Se dio en tiempo y forma respuesta al recurrente, a través del diverso 916/FDX/528/2022-03 de fecha 31 de marzo de 2022.

Por tanto, se niegan los hechos en que funda su impugnación el recurrente, en el Recurso de Revisión número INFOCDMX/RR.IP.1697/2022, pues éste Sujeto Obligado atendió en tiempo y forma la solicitud del particular, informándole lo ya antes citado, toda vez que se le indicó que la solicitud de información presentada corresponde a información que forma parte de un procedimiento en materia penal, por lo que de acuerdo al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo las partes acreditadas en el procedimiento pueden tener acceso a la misma, por lo que si el peticionario se encuentra bajo alguna calidad de las señaladas en el artículo 105 de dicho Código, cuenta con los mecanismos procesales señalados en la propia legislación para obtener toda la información que solicite.

En ese contexto, este Sujeto Obligado estima que no existen los elementos necesarios para la procedencia del Recurso de Revisión, previstos en los artículos 234, 235 y 237 de la Ley de Transparencia en mención, pues no encuadra en ninguna de las causales citadas en el artículo 234 fracciones I a XIII de la Ley de Transparencia aludida.

Así, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción VIII, 234 fracción V y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con los diversos 239 y 244 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, resulta conforme a derecho que se sobresea el presente Recurso de Revisión.

CAUSA DE SOBRESEIMIENTO

Es importante resaltar que por agravio se entiende el daño o lesión que se causa en los derechos fundamentales de una persona, mediante una resolución judicial o administrativa y para que sea procedente el apelante o recurrente debe expresar en primer término la Ley o precepto violado; demostrar con argumentos, razonamientos, citas de jurisprudencia, en qué consiste el daño o lesión a sus intereses o el perjuicio que le causan.

Por todo lo anterior, el suscrito concluye que no existen elementos necesarios para la procedencia del Recurso de Revisión, previsto en los artículos 234, 235 y 237 de la Ley de Transparencia en mención, pues si bien es cierto se realiza una solicitud en términos del Artículo 8 Constitucional, pretendiendo que por la vía de transparencia se le proporcione la información que solicita, no debe perderse de vista que la información solicitada forma parte de un procedimiento en materia penal, por lo que únicamente las partes acreditadas dentro del mismo son quienes pueden tener acceso a la misma de acuerdo al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se transcribe a continuación:

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación:

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

... ..."(Sic).

Como anexo a sus alegatos remitió copia simple de las siguientes documentales:

- Oficio FGJCDMX/110/1911/2022-0 de fecha cinco de abril.
- Oficio 916/FDX/528/2022-03 de fecha treinta y uno de marzo.
- Oficio 916/FDX/844/2022-05 de fecha seis de mayo.

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre y ampliación. El veinticinco de mayo del año dos mil veintidós, se emitió el acuerdo a través del cual se tuvo por presentados los alegatos remitidos por el *Sujeto Obligado*, dentro del término legal establecido para ello.

Dada cuenta del grado de complejidad que presenta el presente medio de impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de la Materia, se decretó la ampliación para resolver el presente recurso de revisión hasta por un plazo de diez días hábiles más.

De igual forma, se tuvo por precluido el derecho de la parte Recurrente para presentar

sus alegatos, mismo que corrió del cuatro al trece de mayo, dada cuenta la notificación

vía PNT en fecha tres de mayo; por lo anterior y toda vez que no se reportó promoción

alguna por parte de la Unidad de Transparencia de este *Instituto* para tales efectos, ni en

el sistema electrónico citado, es por lo que, se determinó lo anterior.

Además, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1697/2022.

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este *Instituto*

es por lo que, el presente Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este

Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se tienen los

siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. El *Instituto* es competente para investigar, conocer y resolver

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6,

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracciones VI y X, en correlación

con el artículo 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior.

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de

dieciocho de abril, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por

considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación con los

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia,

emitida por el *PJF* que a la letra establece lo siguiente: **APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR**

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.4

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto

Obligado pretende hacer valer causal de improcedencia contemplada en la fracción III,

del artículo 248 de la Ley de Transparencia indicando que no se acredita agravio alguno

en contra de la persona Recurrente, ya que a su consideración se dio cabal atención a lo

solicitado, por ello, es que al realizar una revisión del contenido del escrito a través del

cual se interpuso el presente medio de impugnación, se advierte que este se duele debido

_

⁴"Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a

cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el

apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados

por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación.

a que no se le hace entrega de la información requerida a demás de considerar que el

sujeto esta obligado a detentar la información requerida; en tal virtud, es por lo que la

ponencia a cargo de substanciar y resolver el expediente en que se actúa considera que

en el presente caso se actualizan claramente los agravios que dan procedencia para

realizar el estudio de fondo sobre el contenido de la respuesta emitida.

Circunstancias por las cuales, se procederá a realizar el estudio de fondo del presente

recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución Local.

TERCERO. Agravios y pruebas.

Para efectos de resolver lo conducente, este *Instituto* realizará el estudio de los agravios

y la valoración del material probatorio aportado por las partes.

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente.

No se le entrega la información requerida.

El Sujeto detenta la información y no hace entrega de la misma.

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado.

El Sujeto Obligado ofreció como pruebas.

Oficio FGJCDMX/110/1911/2022-0 de fecha cinco de abril.

Oficio 916/FDX/528/2022-03 de fecha treinta y uno de marzo.

Oficio 916/FDX/844/2022-05 de fecha seis de mayo.

III. Valoración probatoria.

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán.

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS. SU

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL"5.

CUARTO. Estudio de fondo.

I. Controversia. La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en

verificar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho

y si en el caso que nos ocupa, es competente o parcialmente competente para hacer

entrega de lo requerido.

II. Marco normativo

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley,

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven

_

⁵ Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL "El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la

argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o

contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable,

integra, sea expedita y se procure su conservación.

En su artículo 6, fracción XXIV establece que será información de interés público la que

resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual,

cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a

cabo los sujetos obligados.

Asimismo, señala que a efecto de que el *Instituto* esté en condiciones de revisar y verificar

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones

de los sujetos obligados, éstos deben poner a disposición del Instituto toda clase de

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información que

resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación

de archivos públicos.

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar

donde se encuentre así lo permita.

Por su parte, el artículo 213 establece que el acceso a la información se dará en la

modalidad de entrega y en su caso, de envío, elegidos por quien es solicitante y, cuando

la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado

deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar

y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

De igual forma, para dar la gestión adecuada a las solicitudes de información que son

presentadas ante los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley de la Materia

se advierte que éstos deben de contar con una Unidad de Transparencia para capturar,

ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto

obligado y dar seguimiento a estas hasta su conclusión.

En tal virtud, se estima oportuno traer a colación los artículos 4, 6 fracción X, 13, 17, 207,

208 y 211 de la Ley de Transparencia, para el ejercicio del derecho de acceso a la

información, la aplicación e interpretación de la ley de la Materia, se realizarán bajo los

principios de máxima publicidad y pro persona.

> Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión

de los sujetos obligados es pública y será de carácter público:

> Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados;

> Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,

competencias o funciones:

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a

sus facultades, competencias y funciones;

> Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades,

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los

sujetos obligados:

> Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán

elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas.

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación;

- De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.
- Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante;
- En la resolución del Comité de Transparencia se deberán establecer las medidas que el personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra;
- ➤ Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán:
- Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo.
- En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la procedencia de acceso en la lengua indígena requerida;
- Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso;
- Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de los documentos:
- Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las características específicas del documento solicitado.
- Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y
- Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del

solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no padrán deixas a la vieta del eslicitante.

que no podrán dejarse a la vista del solicitante.

Por lo anterior, la **Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México**, al formar parte

de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten.

III. Caso Concreto

Fundamentación de los agravios.

No se le entrega la información requerida.

El Sujeto detenta la información y no hace entrega de la misma.

En ese sentido, este *Instituto* al advertir que los agravios, vertidos por la parte Recurrente

tratan esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la entrega de la

información requerida; por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma

conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con

fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que

es del tenor literal siguiente:

Artículo 125.-...

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión

efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por

el Poder Judicial de la Federación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN

CONJUNTO⁶

⁶ Registro No. 254906. Localización: Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis Aislada Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

Precisado lo anterior, y partiendo del hecho de que el interés de la parte recurrente

reside en obtener:

"...Solicito copia de la respuesta que la Fiscalía en Xochimilco dio a la denuncia ingresada el

pasado 4 de marzo del 2022 a las 14:24 horas en la oficialía de partes de Xoch 2..." (sic).

Ante dichos requerimientos el Sujeto Obligado a través de las áreas competentes para

ello, indico a la parte Recurrente que la información que es de su interés no es

susceptible de que se le entreque debido a que esta es información contenida en una

carpeta de investigación, y puede ser requerida a través de una solicitud directa en

materia penal a cargo del Ministerio público, es decir está relacionado con la instauración

de un procedimiento penal en contra de particulares con motivo de una denuncia o

querella.

Información que solo le puede ser proporcionada a personas específicos debidamente

identificadas dentro del proceso de investigación, por lo anterior a efecto de no generar

un perjuicio en su contra indicó que podía presentarse en la coordinación de

investigación territorial en Xochimilco (Xoch 2), a la unidad investigadora a cargo, y en

su caso dirigirse a la oficialía de partes en donde se le podrá dar atención respecto a la

respuesta de su denuncia presentada.

Por lo anterior, y con base en dichos pronunciamientos se considera que la solicitud

que se analiza, se encuentra debidamente atendida, ello de conformidad con los

siguientes razonamientos.

ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de

1969. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz.

En primer término, se estima oportuno citar colación la siguiente normatividad:

LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. (Objeto de la Ley).

I. La organización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encargada de la investigación y persecución de los delitos de su competencia a través del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal para el Distrito Federal, así como los Tratados Internacionales en que México, sea parte y las demás normas aplicables;

Artículo 4. Competencia

La Fiscalía General tiene como competencia investigar los delitos del orden común cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Local, Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten aplicables. Así como todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención de investigación de dichos delitos.

Artículo 9. Fines Institucionales. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General y tiene como fines:

I. Conducir y coordinar la investigación, así como, resolver sobre el ejercicio de la acción penal sobre los delitos materia de su competencia;

. . .

VIII. Facilitar la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas en materia de procuración de justicia; y

IX. Proponer la política criminal y el plan correspondiente en el ámbito local.

Artículo 10. Publicidad y Transparencia.

La Fiscalía General garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones, conforme a lo establecido en la Ley de la materia, y demás normatividad aplicable, estableciendo la Unidad de Estadística y Trasparencia.

Artículo 33. De conformidad con el principio de indivisibilidad del Ministerio Público las facultades, las ejercerá la persona Titular de la Fiscalía por sí, o a través de las Coordinaciones Generales, Fiscalías Especializadas, Órganos, Supervisiones Generales, Fiscalías, Fiscales o Agentes del Ministerio Público y Unidades Operativas y Administrativas competentes, salvo aquéllas que por su naturaleza, sean de ejercicio exclusivo.

El Reglamento de esta Ley, señalará la distribución de competencias de las Autoridades Ministeriales y de las Unidades Administrativas y Órganos de la Fiscalía, así como, las facultades delegables e indelegables de la persona titular.

. . .

Artículo 36. Facultades del Ministerio Público.

Son facultades del Ministerio Público de la Ciudad de México, las siguientes:

I. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios electrónicos, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones

legales aplicables, sobre hechos con apariencia de delito;

II. Investigar y perseguir los delitos en el ámbito de su competencia, interviniendo en todas las

etapas del procedimiento penal y realizando todas las actuaciones procesales aplicables;

III. Dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, con el deber de objetividad y debida diligencia, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia

de la persona imputada, garantizando el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso;

IV. Aplicar los protocolos de investigación que le competan;

. . .

En primer término se advierte que, el sujeto fue categórico al indicar que lo solicitado

por la parte Recurrente es información que se encuentra contenida en una carpeta

de investigación, y esta solo puede ser requerida a través de una solicitud directa

en materia penal ante el Ministerio público, ya que, es parte de alguna Carpeta de

Investigación, se informa a la particular que el mismo se realiza ante el personal

del Ministerio Público, que conoce o conoció de la indagatoria aludida, iniciada

con motivo de una denuncia o una guerella.

Señalando además que, de la lectura al artículo 20 Apartado BC, (derechos de la

persona imputada), fracción VI, de la Constitución Federal, tienen entre sus derechos

a a que sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en

el proceso.

Señalando además que, de la lectura al artículo 20 Apartado C, (derechos de la Víctima

o del ofendido), fracción I, de la Constitución Federal, tienen entre sus derechos a

recibir asesoría jurídica y cuando lo soliciten ser informados del desarrollo del

procedimiento penal.

Asimismo, en cumplimiento a lo previsto en los numerales 1 y 10 párrafo tercero de los

Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información Pública y de Datos

Personales de la Ciudad de México, que establece que cuando se advierta que la parte

peticionaria a través de una solicitud de acceso a la información pública presentada ante

la oficina de información pública desahogue una solicitud a cargo del Sujeto Obligado,

le indicó a la parte Recurrente sobre el procedimiento establecido a realizar para acceder

al trámite en materia penal, atendiendo al marco legal de la materia, de la siguiente

manera:

El ministerio público en el ámbito de su competencia solamente puede hacer entrega de

la información a determinadas personas (las partes o su representantes,

debidamente identificados) dentro del procedimiento de investigación, por lo que, en

términos del principio de legalidad, y no puede llegar a considerarse la inobservancia de

un procedimiento (Leyes especiales), pues se traduciría en una intromisión y

contravención al mismo, por lo que, la solicitud se debe presentar ante el Agente del

Ministerio Público correspondiente, de conformidad con el artículo 8 de Constitución

Federal.

De igual forma si bien indicó que la solicitud corresponde a un trámite administrativo en

materia penal y para obtener esta información debe sujetarse a los términos y

condiciones de la normatividad aplicable en dicha materia, para ello también señaló que,

Puede presentarse en la coordinación de investigación territorial en Xochimilco (Xoch

2), a la unidad investigadora a cargo, y en su caso dirigirse a la oficialía de partes en

donde se le podrá dar atención respecto a la respuesta de su denuncia presentada.

Por ello, se estima oportuno traer a colación por la siguiente normatividad:

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.

. . .

Artículo 228. <u>Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento que corresponda</u>, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o
 II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables.

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de proporcionar la información que se solicita.

De la normatividad transcrita, se desprende que si bien toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, lo cierto es que *Ley de Transparencia*, prevé que

cuando se gestionen las solicitudes de información, y los sujetos obligados consideren

que los requerimientos planteados se traten de trámites previamente establecidos, deben

orientar a quienes son particulares de manera sencilla y comprensible para realizarlos,

tal y como ha acontecido en el presente caso.

Lo anterior, porque como se ha dicho existen ordenamientos especializados y

específicos que deben ser observados al momento de aplicar las disposiciones en

materia de acceso a la información, es decir, si bien el derecho de acceso está previsto

en la ley de la materia, su ejercicio no puede ser ajeno a las diversas disposiciones que

aplican a cada caso concreto, tal y como lo prevé la última parte del artículo 2 de la Ley

de la Materia, previamente transcrito.

En tal virtud, ya que el citado artículo 228 de la Ley de la Materia, dispone que los sujetos

obligados deben orientar en forma sencilla y comprensible a toda persona sobre los

trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información pública; las

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los

formularios que se requieran y las instancias ante las que se puede acudir a solicitar

orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o

sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de las personas servidoras

públicas de que se trate, información que fue proporcionada a la parte recurrente en la

respuesta impugnada.

Por lo anterior se denota que el Sujeto Obligado, no pretende negar u ocultar

dolosamente la información en perjuicio del ejercicio de acceso a la información de la

particular y de la Ley de Transparencia, sino todo lo contrario, puesto que tal y como ha

sido expresado, proporcionó una respuesta en la cual informó y dio atención al

requerimiento planteado por la ahora recurrente, indicándole cual es el procedimiento

que debe seguir para poder acceder a la respuesta recaída a su denuncia.

Ante las aseveraciones expuestas durante el presente considerando, se puede concluir

que, no es posible que la parte Recurrente pueda acceder a la información que es de su

interés debido a que esta, se encuentra regulada a través de un trámite que se

desahoga directamente ante el Agente del Ministerio Público encargado de dar

seguimiento a la denuncia presentada en la coordinación de investigación

territorial XOCH-2.

Para dar sustento jurídico al estudio que antecede, se estima oportuno citar como hecho

notorio el criterio determinado por éste Pleno de este Órgano Garante en la resolución

emitida por la ponencia del Comisionado Presidente el Maestro Arístides Rodrigo

Guerrero García dentro del expediente INFOCDMX/RR.IP.0277/2021⁷, lo anterior con

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México y el diverso 286 del Código, ordenamientos de

aplicación supletoria a la ley de la materia, lo anterior, en virtud de las siguientes

consideraciones:

• En la Resolución del citado recurso, el Pleno de este Instituto determinó, confirmar la

respuesta, en la que el Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento debidamente fundado y motivado en el cual expuso su imposibilidad para hacer entrega de la información solicitada, ya que esta, corresponde a un trámite administrativo en materia penal y para obtener ésta debe sujetarse a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en dicha materia, ello es acudir ante el Ministerio Público encargado de dar seguimiento a la misma y acreditar su personalidad, situación por la

cual proporcionó los datos de localización para dar seguimiento a la carpeta de

investigación.

Atendiendo al contenido del análisis lógico jurídico que precede, a consideración de

quienes integran el Pleno de este *Instituto* se tiene por debidamente atendida la solicitud

que nos ocupa, puesto que, el sujeto de referencia, actúo conforme a derecho al emitir el

pronunciamiento categórico que justifica su imposibilidad para hacer entrega de lo

⁷ Propuesto por la Ponencia del Comisionado Presidente de este Instituto el Maestro Arístides Rodrigo Guerrero García

y resuelto en la Sesión Ordinaria, celebrada el catorce de abril del dos mil veintiuno.

requerido por la parte recurrente, puesto que, informo en su contexto total el

procedimiento a seguir para desahogar el trámite que previamente ha sido

establecido y a través del cual se puede obtener la información que es del interés

de la parte recurrente, situación que se considera apegada al derecho que tutela el

acceso a la información pública y rendición de cuentas en esta Ciudad.

Ante tales aseveraciones, a juicio del pleno de este Órgano Garante, lo anterior se

encuentra ajustado conforme a derecho y por ende se debe de tener por plenamente

atendida la presente solicitud, puesto que se aprecia que el sujeto en todo momento actuó

acorde a los principios de información, transparencia y máxima publicidad, previstos en el

artículo 11 de la Ley de la Materia.

Por lo anteriormente expuesto se aprecia, que el proceder del sujeto crea certeza

jurídica para este Órgano Garante, respecto a que el derecho Constitucional que le atañe

a la parte Recurrente no se vio transgredido, ya que por parte del Sujeto Obligado en

ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir,

vulnerar o afectar el derecho de acceso a información pública de la particular, pues en

todo momento actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, toda

vez que de manera categórica emitió un pronunciamiento, mediante el cual justifico su

imposibilidad para hacer entrega de la información solicitada por la parte

Recurrente.

En tal virtud, se advierte que atendió en su contexto la solicitud hecha por el Recurrente,

estimándose oportuno reiterar al particular, que las actuaciones de los Sujetos Obligados

se revisten del principio de buena fe, ello en razón de que ha hecho un

pronunciamiento categórico a la solicitado, por lo anterior es de observarse lo señalado

en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,

misma que se robustece con la Tesis del PJF: BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS8.

Bajo este contexto es dable concluir, que los agravios esgrimidos por la parte recurrente

resultan **infundados**, ya que la respuesta emitida por el *Sujeto Obligado* se encuentra

ajustada a derecho, toda vez que se pronunció sobre la solicitud, fundando y

motivando su imposibilidad para hacer entrega de lo requerido por la parte

Recurrente.

Por lo expuesto, y toda vez que la respuesta impugnada fue emitida con apego a derecho,

de conformidad con el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, se

CONFIRMA la respuesta emitida por el *Sujeto Obligado*, la cual que se detalló en el

Antecedente 1.2 de la presente resolución.

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de

Transparencia, se informa a la parte Recurrente que, en caso de estar inconforme con

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.

-

⁸ Registro No. 179660. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005. Página: 1723. Tesis: IV.2o.A.120 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del

acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.

IV. Responsabilidad. Este *Instituto* no advierte que, en el presente caso, las personas

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la

Ley de Transparencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y

con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la

respuesta del Sujeto Obligado.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad

de México, se informa a la parte Recurrente que en caso de estar inconforme con la

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto

Obligado a través del medio señalado para tal efecto.

Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el primero de junio de dos mil veintidós, por **unanimidad de votos**, las personas integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA COMISIONADO PRESIDENTE

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO SECRETARIO TÉCNICO.